

Mandatos del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; de la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; y del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas

REFERENCIA:
AL MEX 2/2021

24 de febrero de 2021

Excelencia,

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; de Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; de Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; de Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; de Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento y de Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, de conformidad con las resoluciones 41/12, 42/16, 43/16, 41/17, 42/5 y 41/6 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido en relación con alegaciones de acoso institucional y discriminación en contra de integrantes de la Red Feminista Quintanarroense por parte de las autoridades del estado de Quintana Roo como consecuencia del ejercicio del derecho de reunión pacífica y el derecho a defender los derechos de las mujeres y niñas, en particular la despenalización de la interrupción del embarazo y abogar por los derechos sexuales y reproductivos.

Saludamos el Acuerdo de Voluntades firmado por el Congreso del estado de Quintana Roo y las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense el 10 de febrero de 2021. En dicho acuerdo el Congreso reitera su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos, así como el respeto al derecho de reunión pacífica, y pretende construir un camino hacia la elaboración de una agenda legislativa que permita al estado avanzar en la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la entidad.

Según la información recibida:

La Red Feminista Quintanarroense está formada por mujeres asociadas en 27 colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Desde 2017 las feministas en Quintana Roo han trabajado a favor de los derechos de las mujeres y niñas, en particular de los derechos sexuales y reproductivos. Con el fin de avanzar en la materia, incluida la armonización legislativa con perspectiva de género, las integrantes de la Red han llevado a cabo desde hace más de tres años programas de atención, defensa, acompañamiento y orientación a las víctimas de violencia de género. Estos programas incluyen la configuración de mesas de trabajo con las autoridades estatales, iniciativas legislativas y programáticas entre otros.

El 9 de noviembre de 2020, como protesta a los recurrentes feminicidios, se organizó una manifestación frente a las instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Benito Juárez exigiendo justicia para las mujeres. Dicha protesta se trasladó frente al Palacio municipal de Benito Juárez que fue reprimida a balazos, ocasionando 3 personas heridas por impactos directos de bala (una mujer manifestante, una mujer periodista y un hombre periodista), un número indeterminado de personas lesionadas a golpes, y 8 personas detenidas arbitrariamente (7 mujeres y un hombre), que habrían sido liberadas esa misma noche ante la presunta ilegalidad de su detención. Se reporta que, aunque algunas autoridades mencionaron que durante la protesta se produjeron hechos vandálicos, los mismos habrían sido cometidos principalmente por hombres. Sin embargo, la mayoría de las personas heridas con arma de fuego y las detenidas, fueron mujeres.

El 16 de noviembre de 2020 integrantes de la Red Feminista Quintanarroense presentaron peticiones a los tres poderes del Estado exigiendo cambios estructurales a favor de los derechos de mujeres y niñas. Entre los puntos se cuentan 10 acciones legislativas concretas, entre las que se encuentra la urgente discusión y análisis de las iniciativas en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo aquellas relativas a la despenalización de la interrupción del embarazo.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense organizaron movilizaciones pacíficas en varios municipios del estado y en la capital del mismo, Chetumal, e hicieron una concentración que concluyó con la lectura de un pronunciamiento en el que informaron que se instalarían en la plazoleta del Congreso del estado desde el 25 de noviembre 2020 hasta que el Congreso accediera a dictaminar y discutir las iniciativas en materia de interrupción legal del embarazo.

El 27 de noviembre 2020 por la noche, tras el anuncio de que no podrían seguir utilizando los sanitarios del Congreso debido al cierre de las instalaciones, decidieron ocupar de manera pacífica las instalaciones del Congreso del estado que son de acceso público.

La Red Feminista Quintanarroense solicitó la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, que emitió medidas precautorias y cautelares instando al Congreso a proteger su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la integridad y seguridad jurídica, a que no se violaran tales derechos ni se les impidiese el acceso a los lugares públicos del recinto donde realizan la manifestación como el vestíbulo y los baños.

El 1 de diciembre 2020, el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, compuesto por el presidente de la Comisión y por personas independientes y expertas en materia de derechos humanos emitió un comunicado de respaldo a la regulación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Quintana Roo.

El día 8 de diciembre 2020 grupos eclesiásticos convocaron una manifestación que rodearía las instalaciones del Congreso, oponiéndose a la propuesta de

regular los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. En el marco de dicha convocatoria y de las acciones que realizaron integrantes de la Red Feminista para denunciar posibles ilegalidades en la misma, integrantes de la Red comenzaron a recibir amenazas y agresiones digitales a través de redes sociales que incluían insultos, descalificaciones y llamados al ejercicio de la violencia. Según información recibida, el día 8 de diciembre 2020, mientras acontecía la manifestación, una de las defensoras de derechos humanos que había sido objeto específico de señalamientos en redes sociales sufrió el lanzamiento de un objeto inflamable al jardín de su hogar mientras su familia se encontraba en el mismo, incluyendo sus hijos y causando daños en su vehículo. La rápida reacción de los vecinos habría logrado apagar el incendio, por lo que no se habrían producido daños personales. Dichos hechos habrían sido denunciados ante la fiscalía, pero aún no existirían avances en la investigación.

La página oficial del Congreso del estado de Quintana Roo informó que el día 9 de diciembre de 2020 sesionarían las comisiones unidas a efecto de iniciar la metodología para el análisis, estudio y discusión en Parlamento Abierto de las iniciativas para la despenalización de la interrupción del embarazo. Por ello, los colectivos y organizaciones que conforman la Red Feminista Quintanarroense, se comunicaron formalmente con las diputadas y los diputados quienes reafirmaron su apertura y disposición al diálogo constructivo, solicitando que dicho proceso se efectuara de manera ágil y expedita, para lograr de la mejor manera el pronto desalojo de las instalaciones del Congreso del estado de Quintana Roo. Para ello habrían incluido propuestas para garantizar que las sesiones se pudieran realizar en el recinto del Congreso de manera segura, incluyendo las medidas de mitigación del COVID-19, sin que la protesta afectase al desarrollo de las sesiones.

El 9 de diciembre, fue citado a comparecer en el Congreso el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado de Quintana Roo (CDHEQROO) con el objetivo de rendir cuentas por las medidas cautelares emitidas en favor de la integridad de las personas que se manifestaban en el Congreso y sobre el comunicado emitido por el Consejo Consultivo de la Comisión. Durante la sesión, las diputadas y diputados reprocharon la emisión de las medidas cautelares planteando incluso la posibilidad de remover de su cargo al presidente de dicha institución, haciendo declaraciones presuntamente de carácter xenófobo, estigmatizaron y criminalizaron al movimiento feminista y a quienes se manifiestan en las instalaciones del Congreso.

Ese mismo día en la Sesión Ordinaria, el Pleno acordó una agenda en la que el análisis, estudio y discusión en Parlamento abierto de las iniciativas para la despenalización de la interrupción del embarazo se atendiera para el mes de febrero y eventualmente se dictaminara hasta el mes de abril de 2021.

Desde la ocupación, han sido víctimas de diversas actuaciones entre ellas las siguientes:

- a. Declaraciones de integrantes del Congreso llamando a hacer uso de la fuerza con el fin de abandonar las instalaciones del Congreso del estado;

- b. Desde el miércoles 2 de diciembre, las luces externas de alrededor del Congreso y la explanada no fueron encendidas, generando una situación de inseguridad.
- c. Se apagó el sistema de aire acondicionado que siempre se mantenía encendido lo cual afecta a las mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad dentro del recinto, ya que por motivos de seguridad de la protesta y del propio recinto legislativo no resulta adecuado tener abiertas las puertas del recinto.
- d. Desde el 4 de diciembre de 2020 se les suspendió el servicio de internet, afectando el cumplimiento de las actividades escolares que deben efectuar las niñas y los niños que se encuentran con sus madres en la ocupación, dado que debido a la contingencia por COVID-19 las clases presenciales están suspendidas y se realizan únicamente de manera virtual.
- e. El 21 de diciembre a las 13 horas, fue cortado el suministro de energía eléctrica del recinto legislativo que supuestamente se restauró el 4 de febrero.

La interrupción del suministro de luz eléctrica contraviene las medidas cautelares emitidas por la CDHEQROO, ya que en la práctica impide el uso de los lugares públicos del edificio del Congreso, así como el uso de los baños ya que sin electricidad no funcionan las bombas de agua afectando a la higiene básica de mujeres, niños y niñas e incrementa el riesgo de expansión del COVID-19 debido a la imposibilidad de garantizar las medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias dentro de la ocupación. Así también la falta de energía eléctrica impide que los alimentos perecederos en refrigeración puedan mantenerse en buen estado e impide que los equipos de comunicación como teléfonos y computadoras cuenten con la carga suficiente que permita mantenerse en contacto con el exterior.

Ante estas agresiones las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense han solicitado la intervención de autoridades federales, ya que si la institución de derechos humanos del estado de Quintana Roo ha sido objeto de presiones y amenazas a causa de sus pronunciamientos previos, es muy poco probable que su intervención pueda resultar efectiva. Por ello, las integrantes de dicha Red han iniciado un diálogo con el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para la incorporación al mismo de la Red y de algunas de sus integrantes y se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en virtud de sus facultades para emitir medidas cautelares en cualquier situación de riesgo, así como de atraer casos en principio competencia de autoridades locales.

Como resultado de los esfuerzos de varios actores, incluyendo la Red Feminista Quintanarroense, a principios del mes de febrero, se estableció el diálogo en el Congreso del estado, que desembocó en la firma del Acuerdo de Voluntades mencionado anteriormente.

Sin implicar de antemano, una conclusión sobre los hechos anteriormente expuestos, quisiéramos expresar nuestra preocupación ante las alegaciones mencionadas. Expresamos nuestro llamado para que se proteja y garantice el trabajo de la Red Feminista Quintanarroense y de todas las personas defensoras de derechos humanos, sin intimidaciones incluyendo el acceso a instalaciones sanitarias públicas adecuadas, conforme a la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras y garantizar un entorno seguro y propicio para sus actividades. También quisiéramos recordar que el contexto actual de la pandemia de COVID-19 no exime a los Estados de su obligación de respetar los derechos humanos, incluido el derecho al debido proceso, conforme a los estándares internacionales.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos/as de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.
2. Sírvase informar sobre las medidas tomadas para asegurar la integridad física y psicológica de las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense.
3. Por favor indicar qué medidas ha tomado el Estado para proteger el derecho a la libertad de opinión y expresión de las personas que defienden los derechos humanos de las mujeres y niñas, particularmente en Quintana Roo.
4. Sírvase indicar las medidas que el Estado ha tomado para garantizar un entorno seguro y propicio, con perspectiva de género para las actividades de las defensoras y las personas que defienden los derechos humanos de las mujeres en todos los estados de la República y particularmente en Quintana Roo.
5. Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho de reunión pacífica y a la salud de quienes participan en manifestaciones y otros actos de protesta en el contexto de la pandemia por COVID-19 incluyendo el acceso a instalaciones sanitarias públicas adecuadas.

Agradeceríamos recibir una repuesta en un plazo de 60 días. Transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de su Excelencia se harán públicas a través del sitio [web](#) de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Clement Nyaletsossi Voule
Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Tlaleng Mofokeng
Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Mary Lawlor
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Dubravka Šimonovic
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias

Pedro Arrojo-Agudo
Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento

Elizabeth Broderick
Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

En relación con las alegaciones, y sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales aplicables a los asuntos expuestos con anterioridad.

Quisiéramos hacer referencia al Pacto internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México el 23 de marzo de 1981 en particular los **artículos 19, 21 y 22** que reconocen el, derecho a libertad de opinión y expresión, reunión pacífica y de asociación.

Quisiéramos igualmente hacer referencia al informe **del Relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación (A/HRC/41/41)** en su párrafo 12, el cual establece que los Estados no sólo tienen la obligación negativa de abstenerse de interferir indebidamente en los derechos de reunión pacífica y de asociación, sino que también tienen la obligación positiva de facilitar y proteger esos derechos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Esto significa garantizar que todos disfruten de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Asimismo, en su informe (A/75/184), el Relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación señala que "...el poder colectivo de la sociedad civil y los movimientos sociales son una fuerza motriz para la realización de los derechos humanos. En un mundo de crisis complejas que se agravan - pandemias, racismo, igualdad de género, cambio climático migración, conflictos y desigualdades sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales deben promover y defender el disfrute por parte de las mujeres de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, como medio indispensable para lograr la realización de los derechos humanos para todos."(párr. 69).

“Los Estados deben movilizar recursos y voluntad política para garantizar su aplicación efectiva [...] en particular, los Estados deben (a) Adoptar medidas inmediatas para identificar y derogar las leyes que discriminan (directa o indirectamente) contra la mujer en todas las esferas de la vida.[...] (d) Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación y la violencia en línea, y otros actos de persecución, intimidación o represalias, a fin de garantizar el pleno disfrute de los derechos de la mujer a la libertad de reunión pacífica y de asociación...” (párr. 81 (a) y (c)).

En su recomendación general No.37 relativa al derecho de reunión pacífica, el Comité de Derechos Humanos afirma que “el artículo 21 del Pacto protege las reuniones pacíficas dondequiera que tengan lugar: al aire libre, en el interior y en línea; en espacios públicos y privados; o una combinación de las anteriores. Esas reuniones pueden adoptar muchas formas, incluidas las manifestaciones, las protestas, las

reuniones propiamente dichas, las procesiones, los mítines, las sentadas, las vigiliias a la luz de las velas y los flashmobs. Están protegidas en virtud del artículo 21, ya sean estáticas, como los piquetes, o en movimiento, como las procesiones o las marchas” “Además, los Estados partes tienen determinados deberes positivos para facilitar las reuniones pacíficas y hacer posible que los participantes logren sus objetivos. Por lo tanto, los Estados deben promover un entorno propicio para el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin discriminación y establecer un marco jurídico e institucional en el que se pueda hacer efectivo. A veces puede ser necesario que las autoridades adopten medidas específicas. Por ejemplo, tal vez tengan que cerrar calles, desviar el tráfico o garantizar la seguridad. Cuando sea preciso, los Estados también deben proteger a los participantes contra posibles abusos por parte de agentes no estatales, como la injerencia o la violencia de otros ciudadanos, los contramanifestantes y los proveedores de seguridad privada.” (CCPR/C/GC/37, párrafos. 6 y 24)

Nos permitimos recordarles que el **artículo 22 del PIDCP** garantiza el derecho a la libertad de asociación y que se entiende por asociación todo grupo de personas físicas o jurídicas agrupadas para actuar de consuno y expresar, promover, reivindicar o defender colectivamente un conjunto de intereses comunes (A/HRC/20/27 párr. 51). Esta disposición debe leerse conjuntamente con el artículo 2 del Pacto, en que se establece que “cada uno de los Estados Parte se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Quisiéramos también llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia a las obligaciones que derivan de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificada por México el 23 de marzo de 1981. En su **recomendación general No.33**, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirma que la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos entorpece el acceso de las mujeres a la justicia. En la **recomendación general No. 35**, el Comité indica que la discriminación contra la mujer está inseparablemente vinculada a otros factores que afectan a su vida, como la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos, en particular las defensoras de los derechos humanos.

Asimismo, hacemos referencia al **artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales** al cual México accedió el 23 de marzo de 1981, mismo que protege el derecho a la salud. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su **Observación General No. 14** (E/C.12/2000/4) enfatiza que el derecho a la salud es inclusivo y no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino que está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos y depende de los mismos, entre ellos se encuentra el derecho a la no discriminación, a la igualdad y a la libertad de asociación, reunión y circulación, los cuales son componentes integrales del derecho a la salud (párrafo 3).

El derecho a la salud abarca el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, así como la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional

(párrafo 11). Sólo podrá asegurarse la prestación efectiva de servicios de salud si los Estados garantizan la participación del pueblo (párrafo 54). Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, facilitar y promover la labor realizada por los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil con miras a ayudar a los grupos en situación de vulnerabilidad o marginación a ejercer su derecho a la salud (párrafo 62).

Por otra parte, el apartado c) del párrafo 2 del artículo 12 del PIDESC establece el derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades, y la lucha contra ellas, lo que naturalmente incluye la enfermedad COVID-19. En conexión con lo anterior, el Comité establece que los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas (incluidas las personas que se manifiestan) a los servicios de salud preventivos y absteniéndose de prohibir o impedir los cuidados preventivos y las prácticas curativas (párrafo 34), incluidos los relacionados con el COVID-19.

Quisiéramos también llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre **las normas fundamentales enunciadas en la Declaración de Naciones Unidas de 1998 sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales** universalmente reconocidos. En particular, quisiéramos referirnos a los artículos 1 y 2 que declaran que toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

También quisiéramos llamar la atención del gobierno sobre las **resoluciones 68/181 y 72/247 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las defensoras de los derechos humanos**, que insta a los Estados proteger a las defensoras, respetar y apoyar sus actividades, condenar y prevenir las violaciones y abusos de sus derechos humanos, así como la violencia y la discriminación contra ellas, crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos con una perspectiva de género, asegurar que puedan participar en protestas pacíficas, velar por que la promoción y la protección de los derechos humanos no se tipifiquen como delito. La resolución también subraya la discriminación sistémica y estructural y la violencia a que se enfrentan las defensoras.

Además, **la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 70/169 de 2015** reconoció que "el derecho humano al agua potable da derecho a todos, sin discriminación, a tener acceso a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico", y que "el derecho humano al saneamiento da derecho a todos, sin discriminación, a tener acceso físico y asequible a servicios de saneamiento, en todas las esferas de la vida, que sean seguros, higiénicos y aceptables social y culturalmente y que proporcionen privacidad y garanticen la dignidad, reafirmando al mismo tiempo que ambos derechos son componentes del derecho a un nivel de vida adecuado". En particular, en su **Observación General n° 15**, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirmó que las desconexiones o exclusiones arbitrarias o injustificadas de los servicios o instalaciones de agua constituían violaciones del derecho humano al agua. Además, en su informe, la

anterior Relatora Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (A/HRC/12/24, párr. 75) afirmó que "las instalaciones de saneamiento deben ser físicamente accesibles para todos dentro de las instituciones y lugares públicos o en sus inmediaciones [...]".